



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

RESOLUCIÓN

Ciudad de México, a dos de febrero de dos mil diecisiete. -----

VISTOS para resolver los autos del procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial del Estado número **DGAJ/PRPE/006/2016**, promovido por el C. [REDACTED] por su propio derecho, contra actos de la Procuraduría General de la República.-----

RESULTANDO

PRIMERO.- Por escrito presentado el día catorce de marzo de dos mil dieciséis, ante la Oficialía de Partes de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República, el C. [REDACTED] promovió reclamación de Responsabilidad Patrimonial del Estado, en contra de la Procuraduría General de la República, pretendiendo se le indemnice por los daños y perjuicios siguientes: -----

"... el importe que se ha negado a entregar Bancomer a partir del mes de marzo de 2007, equivalente a los depósitos de clientes no entregados comprobados con copias de transferencias bancarias SWIFTUSD 20, 476.00 Tipo de cambio 18 MXN 368,568.00. EUR 35,185.00 Tipo de cambio 20 MXN 703,700.00 MXN 936, 590.80 MXN 936, 590.80. -----

Salario de Gerente [REDACTED] MXN 450,000.00 no recibido 1.032007-31.08.2008, según contrato Gerente. -----

4



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ENERGÍA
SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

Pérdida de utilidad y valor de las empresas MXN 1, 000,000.00
ANDALEMEXICO TOURS, SA DE CV y ANDALE TOURS & TRAVEL
SA DE CV por inactividad.-----

Casa con No. de cuenta predial 14-01-001-02-045-006 MXN 3,
306,000.00 [REDACTED] se tuvo
que entregar por un Juicio Hipotecario (anexo copia certificada).-----

Gastos tratamiento médico en Alemania por infarto de corazón MXN
783,872.35..."-----

SEGUNDO.- Por acuerdo de ocho de abril de dos mil dieciséis, se le asignó el número de expediente **DGAJ/PRPE/006/2016**, y se formularon diversas prevenciones al reclamante, desahogo efectuado mediante escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil dieciséis, ante la Oficialía de Partes de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Institución.-----

TERCERO.- Por acuerdo de ocho de junio de dos mil dieciséis, se tuvo por desahogada la prevención formulada y se admitió a trámite la reclamación administrativa de responsabilidad del Estado de que se trata.-----

En el acuerdo referido, se tuvo por señalada como actividad administrativa irregular, la siguiente:-----

"...2.1 La orden de detención con fines de extradición del suscrito.

2.2 La ejecución de la orden de detención con fines de extradición.

2.3 Los actos de orden de cancelación de las cuentas bancarias a nombre del suscrito con la institución Bancaria BANCOMER S.A. DE C.V.

2.4 La ejecución de la orden de cancelación de las cuentas bancarias a nombre del suscrito con la institución Bancaria BANCOMER S.A. DE C.V.

M



DIRECCIÓN GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

2.5 Los actos de aprehensión del suscrito desde el mes de marzo de 2007 hasta el mes de agosto de 2008.

2.6 La difusión de los actos anteriores en los medios de comunicación nacional.

2.7 Los daños y perjuicios ocasionados por los actos anteriores..."
(Sic)

Asimismo, se ordenó correr traslado a las autoridades involucradas con la actividad administrativa irregular, a efecto de que rindieran su informe. - - - - -

Teniéndose además, por no presentados cuatro tomos del expediente de extradición formado en su contra, toda vez que no los acompañó en su escrito inicial de demanda, lo anterior con fundamento en los artículos 22, de La Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado; 323 y 324 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento legal de aplicación supletoria al presente procedimiento. - - - - -

CUARTO.- Por escrito presentado el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, ante la Oficialía de Partes de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la parte reclamante exhibió copia simple de diversas documentales, mismas que por auto de ocho de junio de dos mil dieciséis, no se acordaron favorablemente, en virtud de haber sido ofrecidas por persona no autorizada para tal efecto. - - - - -

QUINTO.- Por escrito presentado el siete de julio de dos mil dieciséis, ante la Oficialía de Partes de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, el reclamante promovió ampliación de su demanda de reclamación, petición que por auto de fecha dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, no fue acordada favorablemente. Asimismo se les tuvo por acreditada la calidad de apoderados

μ

μ



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ENERGÍA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

de la parte reclamante, a los CC. G [REDACTED]

SEXTO.- Por oficio número DGPI/1973/16, de fecha catorce de julio de dos mil dieciséis, presentado el mismo día, ante la Oficialía de Partes de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, el Director General de Procedimientos Internacionales de la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, rindió el informe solicitado, dando contestación a las pretensiones reclamadas, opuso excepciones y defensas, ofreció pruebas de su parte y objetó las ofrecidas por los reclamantes, el que se acordó mediante proveído de veintidós de agosto de dos mil dieciséis. -----

SÉPTIMO.- Por oficio número DEQ/3147/2016, de fecha catorce de julio de dos mil dieciséis, presentado el quince del mismo mes y año, ante la Oficialía de Partes de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, el Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República, en el Estado de Querétaro, rindió el informe solicitado, dando contestación a las pretensiones reclamadas, opuso excepciones y defensas, ofreció pruebas de su parte y objetó las ofrecidas por los reclamantes, ocurso que se acordó mediante proveído de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis. -----

En dicho acuerdo, se señaló que no se encontraban pruebas pendientes por desahogar, por lo que se otorgó a las partes el plazo de diez días para que formularan sus alegatos. -----



DIRECCIÓN GENERAL
DE LA
REGISTRACIÓN

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

OCTAVO.- Por escrito presentado el dos de agosto de dos mil dieciséis, ante la Oficialía de Partes de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, el C. [REDACTED] autorizado del reclamante, ofreció diversas documentales, mismas que mediante auto de fecha cuatro de octubre de dos mil dieciséis, no fueron acordadas favorablemente por no tener la naturaleza de pruebas supervenientes. -----

NOVENO.- Por escrito presentado el nueve de septiembre de dos mil dieciséis, ante la Oficialía de Partes de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, el C. [REDACTED] autorizado del reclamante, ofreció diversas documentales, mismas que mediante auto de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis, no fueron acordadas favorablemente, por no tener la naturaleza de pruebas supervenientes. -----

DÉCIMO.- Por escrito presentado el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, ante la Oficialía de Partes de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, el C. [REDACTED] autorizado del reclamante, ofreció diversas documentales, mismas que mediante auto de fecha veinte de enero de dos mil diecisiete, no fueron acordadas favorablemente, por no tener la naturaleza de pruebas supervenientes. -----

DÉCIMO PRIMERO.- Por autos de fechas cinco de octubre, dieciséis de noviembre ambos de dos mil dieciséis y veinte de enero de dos mil diecisiete, se tuvieron por presentados los alegatos de las partes. -----

CONSIDERANDO



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO FEDERAL
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ENERGÍA

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

PRIMERO.- De la Competencia. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 109, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 18, 22, 23, 24 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, así como; 1, 12, 42, 50 y 59, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en relación con los numerales 7 y 10, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 3, inciso H, fracción II, 12, fracciones II, IV y XIII, y 49, fracción XXI, de su Reglamento, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República, es competente para conocer y resolver de la reclamación presentada en vía administrativa por el C. [REDACTED]

[REDACTED] -----

SEGUNDO.- De la Legitimación. De las manifestaciones realizadas en el escrito inicial de demanda se advierte que el reclamante pretende la indemnización por los daños causados como consecuencia de la actividad administrativa que considera irregular por parte de la Procuraduría General de la República, actividad que se hizo consistir, esencialmente en la ejecución de la orden de detención con fines de extradición. -----

Al respecto, de las pruebas que obran dentro del presente procedimiento, ofrecidas por las autoridades que fueron señaladas como involucradas, se advierte que el C. [REDACTED] fue la persona a la que se le inició el procedimiento de detención provisional con fines de extradición, por lo que se considera que tal situación es motivo suficiente para tener por acreditado el interés jurídico y la legitimación activa que tiene el reclamante para acudir en vía administrativa a demandar la responsabilidad patrimonial del [REDACTED]



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

Estado, sin que tal legitimación reconocida, confirme la existencia de una actividad irregular por parte de la Procuraduría General de la República. - - - - -

TERCERO.- A criterio de esta autoridad, resulta improcedente la reclamación que en vía de responsabilidad patrimonial del Estado promovió el C. [REDACTED]

[REDACTED] en contra de la Procuraduría General de la República, en virtud que los argumentos que hizo valer en su demanda, resultan infundados y en consecuencia, no acredita la existencia de alguna actividad irregular por parte de la Institución, y por tanto, nunca acreditó el nexo causal entre el daño y la actividad del Estado, conforme a las determinaciones jurídicas siguientes: - - - - -

Primeramente, debe decirse que por método de exposición, se precisará un marco conceptual-regulatorio sobre la actividad administrativa irregular del Estado, señalando cuales son los elementos necesarios para que se acredite una actividad administrativa irregular, y acerca de la responsabilidad patrimonial del Estado objetiva y directa. - - - - -

Después, se señalará un marco histórico sobre los hechos que dieron origen a la presente reclamación patrimonial; y por último, se realizará un análisis y resolutorio, tomando como base para ello, los argumentos aducidos por las partes, así como las pruebas ofrecidas por éstas, para determinar si en realidad existió o no, una actividad administrativa irregular del Estado en este caso, imputable a las autoridades de la Procuraduría General de la República. - - - - -

Marco conceptual regulatorio: - - - - -

A

M

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

El análisis del presente procedimiento, se centrará en lo que dispone el artículo 109, último párrafo (*antes 113 segundo párrafo*), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto que regula lo concerniente a la responsabilidad patrimonial del Estado, derivado de su actividad administrativa irregular, así como lo dispuesto por el artículo 1º y correlativos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. -----

Al respecto, es trascendente tomar en cuenta los alcances del concepto de actividad administrativa irregular del Estado, así como los elementos que deben considerarse a fin de establecer si en el caso se actualiza dicha figura.-----

En tal contexto, conviene citar el contenido del artículo 113, segundo párrafo (*actualmente 109 último párrafo*), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: -----

"Artículo 113.- (...)

La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes."

Del precepto transcrito, se advierte el establecimiento a nivel constitucional como bien tutelado en favor de los particulares, la exigibilidad de una actividad administrativa regular de la función administrativa del Estado y para el caso contrario, surge la figura de responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular cause a éstos en sus bienes o derechos, la cual será objetiva y directa; y el derecho que tienen los particulares a recibir una indemnización, conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.-----4



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

El artículo 113 Constitucional, en su segundo párrafo, (*actualmente 109 último párrafo*), establece la responsabilidad del Estado, únicamente respecto a los daños que cause a los particulares con motivo de su actividad administrativa irregular, es decir, aquélla que por acción u omisión incumpla con los estándares promedio de funcionamiento de la actividad o servicio. En este supuesto, el particular podrá demandar la indemnización directamente al Estado (responsabilidad directa) sin necesidad de acudir, en primer término, en contra del funcionario a quien pudiera imputarse el daño, pues lo que determina la obligación y responsabilidad derivada, es la realización objetiva del hecho dañoso, imputable al Estado (responsabilidad objetiva) y no la motivación subjetiva del agente de la administración. -----

Esto es, si el artículo Constitucional en comento alude a que la responsabilidad patrimonial del Estado surge si éste causa un daño al particular "*con motivo de su actividad administrativa irregular*", en realidad, está haciendo referencia a la responsabilidad *objetiva*; abandona cualquier elemento vinculado con el dolo o la ilegalidad en la actuación del funcionario agente, a fin de centrarse en aquellos actos propios del Estado realizados de manera anormal; es decir, sin atender a las condiciones normativas o parámetros creados por la propia administración o derivados de la actividad específica que en el área de servicios sea razonable exigir. -----

La razón esencial de la responsabilidad patrimonial del Estado, es propiciar y garantizar, que la actividad administrativa sea regular y que la gestión pública se preste conforme a ciertos estándares de calidad. Por lo tanto, de no darse excepcionalmente esas condiciones, el objeto de la responsabilidad patrimonial



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

del Estado, consiste en la reparación de los daños producidos, es decir, consiste en dejar indemnizado al sujeto activo de la relación, a partir que ha resentido en sus bienes o derechos determinados daños derivados de la actividad administrativa, es decir, se le compensa económicamente de manera tal que restaure la integridad del patrimonio afectado, siempre y cuando el daño ha surgido, precisamente, a partir de la actividad administrativa irregular del Estado, considerando para ello, que el titular del derecho, no tenga la obligación jurídica de soportarlo, todo ello, en razón a que tiene derecho a que la actividad administrativa se preste y desarrolle de forma regular.¹ -----

A mayor abundamiento, sobre el tema relativo a la actividad administrativa irregular del Estado, debe atenderse a los razonamientos que sobre este aspecto ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, manifestando, que la actividad administrativa irregular del Estado en el sistema de responsabilidad patrimonial del Estado, a la luz de la teoría del riesgo, debe entenderse como los actos propios de la administración realizados de manera ilegal o anormal, esto es, sin atender a las condiciones normativas o a los parámetros creados por la propia administración o pertinente de la actividad. Dicho de otro modo, la actividad administrativa irregular estatal se identifica con la actuación desplegada por el ente público sin satisfacer la normatividad propia a los estándares de calidad exigibles para la realización de dicha actividad. - -

Apoya a lo anterior, la jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente:
**RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO OBJETIVA Y DIRECTA.
SU SIGNIFICADO EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL**

¹ Razonamientos extraídos de la ejecutoria pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 4/2004, específicamente del considerando Quinto.



DIRECCIÓN GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

**ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS.²-----**

Así, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expone que cuando en el ejercicio de sus funciones el Estado genere daños a los particulares en sus bienes o derechos, éstos podrán demandar la responsabilidad estatal de forma "directa", sin tener la carga procesal de acreditar la ilicitud o el dolo del servidor público causante del daño imputado, pero sin la carga de probar irregularidad de su actuación, amén de no tener que demandar previamente a dicho servidor. -----

En la definición de la responsabilidad directa que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación en dicha tesis, se advierten elementos torales de la responsabilidad objetiva que están vinculados con la definición transcrita; la irrelevancia jurídica de la ilicitud o el dolo del servidor público que causó el daño en los bienes o derechos reclamados. -----

En ese orden, cuando en la prestación de un servicio público se causa un daño a los bienes o derechos de los particulares, por haber actuado de forma irregular, se configura la responsabilidad del Estado de resarcir el daño y por otro lado, se genera el derecho de los afectados a que sus daños sean reparados. Así, debe entenderse que la actividad administrativa irregular del

² Del segundo párrafo del numeral citado se advierte el establecimiento a nivel constitucional de la figura de la responsabilidad del Estado por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular cause a los particulares en sus bienes o derechos, la cual será objetiva y directa; y el derecho de los particulares a recibir una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. A la luz del proceso legislativo de la adición al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la "responsabilidad directa" significa que cuando en el ejercicio de sus funciones el Estado genere daños a los particulares en sus bienes o derechos, éstos podrán demandarla directamente, sin tener que demostrar la ilicitud o el dolo del servidor que causó el daño reclamado, sino únicamente la irregularidad de su actuación, y sin tener que demandar previamente a dicho servidor, mientras que la "responsabilidad objetiva" es aquella en la que el particular no tiene el deber de soportar los daños patrimoniales causados por una actividad irregular del Estado, entendida ésta como los actos de la administración realizados de manera ilegal o anormal, es decir, sin atender a las condiciones normativas o a los parámetros creados por la propia administración.



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

Estado, comprende también la prestación de un servicio público deficiente, que es imputable sólo a la administración en su conjunto. -----

Por lo tanto, la responsabilidad patrimonial debe evaluarse y considerarse de manera sistemática dentro del orden jurídico. Las funciones y fines de la responsabilidad administrativa son primordialmente cuatro a saber: **I) compensación de daños; II) crear incentivos tendentes a la prevención de daños y accidentes; III) control del buen funcionamiento de la acción administrativa y IV) demarcación de las conductas administrativas libres de responsabilidad civil.** -----

De tal modo, que no tiene como única función la compensación de las víctimas, sino que debe concebirse que la administración debe configurarse y estructurarse de tal manera que cumpla, adecuadamente todas y cada una de las funciones indicadas, puesto que el bien tutelado es una administración pública eficiente y en el evento de que no se cumpla con tal condición, en todo caso deberá garantizarse y restituirse a través de la indemnización del daño ocasionado. -----

Ahora bien, como se mencionó antes, el reclamo de la indemnización debe realizarse conforme a la legislación específica para ello, es decir, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, la cual de conformidad con su artículo primero³, tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para

³ ARTÍCULO 1.- La presente Ley es reglamentaria del segundo párrafo del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones son de orden público e interés general; tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado. La responsabilidad extracontractual a cargo del Estado es objetiva y directa, y la indemnización deberá ajustarse a los términos y condiciones señalados en esta Ley y en las demás disposiciones legales a que la misma hace referencia.

Para los efectos de esta Ley, se entenderá por actividad administrativa irregular, aquella que cause daño a los bienes y derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate.



SECRETARÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado. - - - - -

A nivel legal, para la procedencia del pago de la indemnización deben colmarse los siguientes extremos: - - - - -

a) Lesión indemnizable. - - - - -

Que no es más que la afectación o acto dañoso que sufre el particular sin tener la obligación de soportarlo, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate. - - - - -

En tal sentido, para que la lesión sea indemnizable por parte del Estado, el daño debe ser antijurídico, lo que significa que ninguna Ley establezca los supuestos que justifiquen dicha afectación ya sea de manera expresa o implícita, como lo ordena el segundo párrafo del artículo 1º de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. - - - - -

b) Que sea económicamente evaluable. - - - - -

El artículo 4º de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado,⁴ dispone que los daños y perjuicios materiales que constituyan la lesión patrimonial reclamada, incluidos los personales y morales, habrán de ser reales, evaluables en dinero. - - - - -

4 Los daños y perjuicios materiales que constituyan la lesión patrimonial reclamada, incluidos los personales y morales, habrán de ser reales, evaluables en dinero, directamente relacionados con una o varias personas, y desiguales a los que pudieran afectar al común de la población.



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
FEDERACIÓN

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

Esto es, el daño debe ser patrimonialmente apreciable, es decir, que se pueda cuantificar y valorar en dinero, lo que no excluye el daño moral ya que si bien no se afecta un derecho propiamente patrimonial, si es susceptible de cuantificarse mediante una ponderación. -----

c) Que el daño derive de una actividad administrativa irregular. -----

Resulta necesario que los daños estén vinculados con las actividades de la gestión desarrollada por la administración pública, conforme a las reglas del derecho administrativo-----

Lo que implica, que para que pueda imputarse a la administración pública la conducta de una persona física, es necesario que ésta esté integrada a su estructura orgánica y que actúe en ejercicio de sus funciones encomendadas.

d) Que el daño sea individualizado a una persona o un grupo de personas. -----

Para que el daño sea indemnizable es necesario que recaiga sobre sujetos identificables, por lo que no están comprendidas las afectaciones que se causen a la generalidad o a una pluralidad indeterminada de personas. -----

La distinción se encuentra entonces en la inequidad y en el especial sacrificio que representa el daño para el perjudicado respecto de otros individuos que, estando en la misma situación y circunstancias no lo sufrieron. Tal perjuicio constituye realmente un detrimento patrimonial que el particular no debía

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

soportar, y que es desigual respecto de las cargas generales o colectivas que la ley o la misma vida impone.⁵ - - - - -

e) Que no sea derivado de un caso fortuito o de fuerza mayor. - - - - -

Conforme al artículo 3° de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, se exceptúan de la obligación de indemnizar, además de los casos fortuitos y de fuerza mayor, los daños y perjuicios que no sean consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado, así como aquellos que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de su acaecimiento y en aquellos casos en los que el solicitante de la indemnización sea el único causante del daño.⁶ - - - - -

f) Nexo causal entre el daño y la actividad del Estado. - - - - -

Se debe acreditar la relación entre el daño y la actividad administrativa irregular del Estado. - - - - -

Como lo refiere el artículo 21, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, el daño que se cause al patrimonio de los particulares con motivo de la actividad administrativa irregular, en los casos en los que la causa del daño sea identificable deberá acreditarse de forma fehaciente, o en su defecto, las condiciones causales, así como la participación de otros agentes en la

⁵ Vargas Gil, Luis Rodrigo, "Responsabilidad Patrimonial del Estado, Instrumento Eficaz de Justicia", Editorial Porrúa, México, 2016, página 143.

⁶ ARTÍCULO 3.- Se exceptúan de la obligación de indemnizar, de acuerdo con esta Ley, además de los casos fortuitos y de fuerza mayor, los daños y perjuicios que no sean consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado, así como aquellos que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de su acaecimiento y en aquellos casos en los que el solicitante de la indemnización sea el único causante del daño.



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
DEFENSA

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

generación de la lesión, deberá probarse a través de la identificación precisa de los hechos que produjeron el resultado final, examinando las circunstancias que hayan podido atenuar o agravar la lesión patrimonial reclamada.⁷ - - - - -

La doctrina, distingue los elementos que deben ocurrir para la procedencia del nexo causal, lo cuales son: - - - - -

- **La existencia de una lesión a los administrados en sus bienes y derechos.**
- **Que esa lesión sea imputable a algún ente público con motivo de la realización de la actividad administrativa irregular.**
- **Que exista relación causal entre el hecho imputado al ente público y el daño efectivamente producido.⁸**

En contexto de lo antes referido, resulta importante definir la naturaleza y alcance del concepto nexo causal el cual se concibe como un conector capaz de asociar dos o más eventos en una relación causa efecto o correspondencia, basado en el principio de razón suficiente, esto es, supone que se constate o verifique la interrelación de determinados eventos -antecedente y consecuencia- a partir de un análisis fáctico para determinar si los acontecimientos sucedidos concurren y determinan la realización del daño. - -

7 ARTÍCULO 21.- El daño que se cause al patrimonio de los particulares por la actividad administrativa irregular, deberá acreditarse tomando en consideración los siguientes criterios:

a) En los casos en que la causa o causas productoras del daño sean identificables, la relación causa-efecto entre la lesión patrimonial y la acción administrativa irregular imputable al Estado deberá probarse fehacientemente, y

b) En su defecto, la causalidad única o concurrencia de hechos y condiciones causales, así como la participación de otros agentes en la generación de la lesión reclamada, deberá probarse a través de la identificación precisa de los hechos que produjeron el resultado final, examinando rigurosamente las condiciones o circunstancias originales o sobrevenidas que hayan podido atenuar o agravar la lesión patrimonial reclamada.

8 Lucero Espinosa Manuel "La causalidad en la Responsabilidad Patrimonial del Estado" Obra conmemorativa del 75 aniversario de la promulgación de la ley de justicia fiscal. Tomo III, México, 2011. Página 253



SECRETARÍA GENERAL
DE LA
DEFENSA

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

En otras palabras, poder anticipar o prever si a partir de ciertos actos u omisiones, la concurrencia del daño era de esperar en la esfera del curso normal de los acontecimientos, o si por el contrario, queda fuera de este posible cálculo, de tal forma que sólo en el primer caso, si el resultado corresponde con la actuación que lo originó, es adecuado a ésta, se encuentra en relación causal con ella y sirve de fundamento del deber indemnizar.⁹ -----

Esta causa adecuada o causa eficiente exige un presupuesto, una *conditio sine qua non* (condición sin la cual no), esto es, un acto o un hecho sin el cual es inconcebible que otro evento se considere consecuencia o efecto del primero; aunque esta condición por sí sólo no basta para definir la causalidad adecuada sino que es necesario, además, que resulte normalmente idónea para determinar aquel evento o resultado, tomando en consideración todas las circunstancias del caso, esto es, debe existir una adecuación entre el acto y evento, lo que se ha llamado la verisimilitud del nexo y sólo cuando sea así, dicha condición alcanza la categoría de causa adecuada, causa eficiente o causa próxima y verdadera del daño, quedando así excluidos tanto los actos indiferentes como los actos inadecuados o inidóneos o los absolutamente extraordinarios.¹⁰ -----

A mayor abundamiento, así como los particulares se encuentran obligados a acreditar la responsabilidad patrimonial del Estado, también las autoridades demandadas están constreñidas a acreditar la debida diligencia acorde a lo establecido en la normatividad, que el daño surge de circunstancias o hechos imprevisibles o inevitables según los conocimientos de la ciencia o de la técnica

⁹ Menudo López, Francisco y otros. "La Responsabilidad Patrimonial de los Poderes Públicos, Editorial Lex Nova, España, 2005, página 35.

¹⁰ Menudo López, Francisco y otros. "La Responsabilidad Patrimonial de los Poderes Públicos, Editorial Lex Nova, España, 2005, página 35.



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

existentes en el momento de su acaecimiento, o por la existencia de la fuerza mayor que lo exonera de responsabilidad patrimonial. -----

El artículo 22, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado;¹¹ establece dos obligaciones que resultan de vital importancia en esta materia, una imposición es para el que reclama y la otra al Estado, el primero debe demostrar la responsabilidad patrimonial del Estado, por no tener la obligación jurídica de soportarla, y el segundo le corresponderá probar, que los daños ocasionados al particular, no son a consecuencia de la actividad administrativa irregular. -----

En resumen, se puede señalar que existe actividad administrativa irregular por parte del Estado, cuando los actos propios de la administración son realizados de manera ilegal, es decir, sin atender a las condiciones normativas o a los parámetros creados por la propia administración o pertinente a la actividad que realizan. -----

Es así, que atendiendo el párrafo segundo del artículo 113, Constitucional, (actualmente 109. último párrafo),¹² la responsabilidad patrimonial del Estado, es directa y objetiva. -----

Es **Directa**, ya que cuando en el ejercicio de sus funciones el Estado genere daños a los particulares en sus bienes o derechos, éstos podrán demandarlo

¹¹ ARTÍCULO 22.- La responsabilidad del Estado deberá probarla el reclamante que considere lesionado su patrimonio, por no tener la obligación jurídica de soportarlo. Por su parte, al Estado corresponderá probar, en su caso, la participación de terceros o del propio reclamante en la producción de los daños y perjuicios irrogados al mismo; que los daños no son consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado; que los daños derivan de hechos o circunstancias imprevisibles o inevitables según los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de su acaecimiento, o bien, la existencia de la fuerza mayor que lo exonera de responsabilidad patrimonial.

¹² Artículo 113.- (...)

La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes."



DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS
JURÍDICOS
REPUBLICA

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

directamente sin tener que demostrar previamente la ilicitud o el dolo del servidor que causó el daño reclamado, sino únicamente la irregularidad de su actuación, y sin tener que demandar primeramente a dicho servidor público. - -

Es **Objetiva**, al ser ajena a la negligencia y el dolo, bastando la comprobación de que el particular no tiene el deber de soportar los daños causados. - - - - -

En conclusión a lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, en caso de que exista responsabilidad patrimonial del Estado, para que proceda el pago indemnizatorio por la actividad administrativa irregular del Estado, deben concurrir los requisitos siguientes: - - - - -

- a) La existencia de un daño, el cual debe ser: efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una o varias personas.
- b) Que el daño sea imputable a la administración pública, por ser efecto de su actividad administrativa irregular.
- c) El nexo causal entre el daño y la actividad irregular de la administración pública.

Marco histórico: - - - - -

A continuación, a efecto de estar en aptitud de examinar la materia del presente procedimiento, se precisan los hechos relacionados con la reclamación patrimonial del C. [REDACTED] los cuales se advierten



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

de los diversos medios probatorios que fueron desahogados durante la secuela procedimental y que en síntesis son los que siguen:-----

1.- Mediante oficio ASJ-38431, dentro del expediente ASJ-/230/2756/2006, de ocho de enero del dos mil siete, la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hizo del conocimiento del Director General de Extradiciones y Asistencia Jurídica de la Procuraduría General de la República, que el Gobierno de Polonia, a través de su Embajada en la República Mexicana, mediante nota diplomática número 11-175-06, de diecinueve de diciembre de dos mil seis, realizó solicitud de detención provisional con fines de extradición internacional, del Ciudadano [REDACTED] para ser procesado ante el Tribunal Regional de Cracovia Sródmiescie, Polonia, dentro del procedimiento VDs 75/05/s. por el delito de fraude, previsto en el artículo 286, párrafo primero, en relación con el 294 párrafo primero y 12, todos del Código Penal de Polonia. Dicho oficio fue dirigido al Director General de Extradiciones y Asistencia Jurídica de la Procuraduría General de la República. -----

2.- Mediante oficio número SJAI/152/2007, de fecha veintitrés de febrero de dos mil siete, el licenciado José Luis Santiago Vasconcelos, en su carácter de Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en suplencia por ausencia del C. Procurador General de la República, solicitó al Juez de Distrito en Turno del Estado de Querétaro que se decretara la detención provisional con fines de extradición internacional del C. [REDACTED]





PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

3.- Por resolución de veintisiete de febrero de dos mil siete, dictada dentro del procedimiento especial 01/2007-I, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Querétaro, ordenó lo siguiente: - - - - -

"...PRIMERO.- En términos del considerando cuarto de esta resolución, siendo las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS del veintisiete de febrero de dos mil siete, se libra ORDEN DE DETENCIÓN PROVISIONAL CON FINES DE EXTRADICIÓN INTERNACIONAL del ciudadano alemán [REDACTED] (a) [REDACTED] cuya media filiación quedó establecida en el referido considerando de la presente resolución, a fin de que se sea procesado por los delitos de FRAUDE, previstos en el artículo 286, párrafo 1 en relación con el artículo 294, párrafo primero y con el artículo 12 del Código Penal de Polonia.

SEGUNDO.- Mediante oficio que se gire al Procurador General de la República, transcribese la presente determinación por triplicado y por conducto del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que ordene a quien corresponda, proceda a la búsqueda, localización y detención con fines de extradición al ciudadano alemán [REDACTED] (a) [REDACTED] debiéndose también girar oficio al Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales al Director General de Extradiciones y Asistencia Jurídica y al Director de Extradiciones, todos ellos de la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, haciendo de su conocimiento esta resolución, para su conocimiento y efectos legales de su competencia y para que a su vez lo haga del conocimiento de la Embajada de la República de Polonia en nuestro país.

TERCERO.- Una vez cumplida la presente determinación, el reclamado deberá quedar a disposición de este juzgado en el interior de Centro de Readaptación Social Varonil ubicado en San José el Alto, Querétaro..."

4.- Por oficio AFI/QRO/1272/2007, de primero de marzo de dos mil siete, los agentes de la Policía Federal Investigadora, adscritos a la Jefatura Regional en el Estado de Querétaro, de la Dirección General de Despliegue Regional de la Agencia Federal de Investigación, de la Procuraduría General de la República, informaron al Juez Segundo en el Estado de Querétaro, respecto al debido cumplimiento que dieron a la orden de detención provisional con fines de extradición internacional, librada en contra del C. [REDACTED] [REDACTED] acompañando certificado médico de integridad física e identidad del reclamado. - - - - -

M



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

5.- Mediante acuerdo de primero de marzo de dos mil siete, dictado en el expediente 01/2207-I, el Juez Segundo Distrito en el Estado de Querétaro dio cuenta con el oficio referido en el numeral que antecede, señalando que a partir de esa fecha empezarían a correr los sesenta días naturales que habrían de computarse para la petición formal de extradición correspondiente, señalando como fecha límite para realizarla, el veintinueve de abril de dos mil siete, asimismo, señaló las diecinueve horas del primero de marzo de dos mil siete, para el verificativo de la audiencia de ley, de conformidad con los artículos 24 y 25 de la Ley de Extradición Internacional. -----

6.- En la audiencia antes referida, el Juez Federal hizo del conocimiento del hoy reclamante, que el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en suplencia por ausencia del C. Procurador General de la República, solicitó su detención provisional con fines de Extradición, motivo por el cual dicho Juzgado de Distrito, mediante resolución de veintisiete de febrero de dos mil siete, ordenó dicha detención, teniendo como consecuencia que agentes de la Policía Federal Investigadora, procedieran a su búsqueda, localización y captura, quienes lo pusieron a disposición de ese Tribunal, el día de la fecha, en el interior del Centro de Readaptación Varonil de San José el Alto. -----

Asimismo se le hizo saber que a partir de esa fecha, esto es, primero de marzo de dos mil siete, se decretó su detención provisional con fines de Extradición Internacional, también, se le hizo de su conocimiento que se le oiría en defensa por sí o por su defensor y que dispondría de tres días hábiles para oponer las excepciones que prevé el artículo 25 de la Ley de Extradición Internacional y en su caso, veinte días para probarlas. -----



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

7.- Mediante oficio ASJ-13494 de veinticinco de abril de dos mil siete, dictado dentro del expediente ASJ-/230/2756/2006, la licenciada Sandra E. Hernández Ortiz, Directora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, estimó procedente la transmisión a la Procuraduría General de la República de la citada petición formal de extradición de [REDACTED] para que fuera presentada de inmediato ante el Juez de Distrito correspondiente. -----

8.- Por oficio número SJA/353/2007, de fecha veintisiete de abril de dos mil siete, el licenciado José Luis Santiago Vasconcelos, en su carácter de Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en suplencia por ausencia del C. Procurador General de la República, formuló ante la Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Querétaro, la petición formal de Extradición Internacional de [REDACTED] (a) [REDACTED] por así haberlo solicitado el Gobierno de la República de Polonia, también solicitó la detención formal con fines de extradición internacional del reclamante y que en su oportunidad emitiera la opinión jurídica en el sentido de si es procedente la extradición. -----

9.- En la audiencia celebrada el veintiocho de abril de dos mil siete, el hoy reclamante a través de su representante legal, realizó diversas manifestaciones y opuso diversas excepciones. -----

10.- El veintinueve de junio de dos mil siete, en los autos del expediente 1/2007-I, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Querétaro, emitió la opinión jurídica prevista en el artículo 27 de la Ley de Extradición Internacional, en la

M

M



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

que se determinó procedente la extradición internacional del C. [REDACTED]

[REDACTED] en los términos siguientes: -----

"...PRIMERO.- ES PROCEDENTE LA EXTRADICIÓN INTERNACIONAL de [REDACTED] solicitada por la República de Polonia en nombre del gobierno de su país, para ser procesado por dos delitos de FRUADE previstos en el artículo 286, párrafo primero, en relación con los artículos 12 y 294, párrafo primero, del Código Penal de Polonia, lo anterior, en términos del considerando respectivo de esta opinión.

SEGUNDO.- Comuníquese esta opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Procurador General de la República, al Director de Extradiciones de la Procuraduría General de la República, al Sub Procurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República y al Director General de Extradiciones y Asistencia Jurídica de la Procuraduría General de la República, lo anterior para su conocimiento y efectos legales correspondientes.

TERCERO.- Se deja al reclamado [REDACTED] A DISPOSICIÓN DE LA Secretaría de Relaciones Exteriores, interno en el Centro de Readaptación Social de San José el Alto, Querétaro en términos de lo dispuesto en la parte última del artículo 29, de la Ley de Extradición Internacional, haciéndole saber que esta determinación al director de dicho establecimiento penal, para los efectos legales conducentes..."

11.-Mediante acuerdo de treinta y uno de julio de dos mil siete, la Secretaria de Relaciones Exteriores CONCEDIÓ al Gobierno de la República de Polonia, la extradición internacional del C. [REDACTED] también conocido como [REDACTED] para que fuera procesado en el procedimiento VDs/75/05/S de la Fiscalía General en Cracovia acusado de cometer el delito de fraude. -----

12.- El siete de agosto de dos mil ocho, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Vigésimo Segundo Circuito, dentro del Amparo en Revisión 67/2008, resolvió confirmar la sentencia dictada en el juicio de amparo 1036/2007-I y su acumulado 1073/2007-I, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Querétaro, por lo que concedió la protección de la Justicia Federal al C.

[REDACTED] para dejar sin efectos la resolución [REDACTED]



M



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

mediante la cual se autorizó la extradición y ponerlo en libertad, por lo que se refiere a ese procedimiento. -----

Cabe señalar, que la concesión del amparo se otorgó básicamente porque el Gobierno de Polonia no remitió el texto vigente de la legislación penal aplicable para la pena, así como la totalidad de los numerales en los que se establece la prescripción de la acción y sanción, en la época en que se cometieron los delitos que acontecieron en febrero de mil novecientos noventa hasta finales de mil novecientos noventa y dos , así como en el periodo entre el ocho de marzo y el diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y uno, e igualmente no remitió la declaración autorizada de la vigencia de las disposiciones remitidas, de que éstas eran las que imperaban en la época en la que se cometieron los ilícitos, tal y como lo establece el artículo 16, fracción IV, de la Ley de Extradición Internacional. -----

13.- Por acuerdo de ocho de agosto de dos mil ocho, y en cumplimiento a la ejecutoria antes citada, la Secretaría de Relaciones Exteriores, dejó sin efectos el diverso acuerdo de treinta y uno de julio de dos mil siete, y decretó levantar las medidas restrictivas de libertad decretadas al nacional alemán [REDACTED]

[REDACTED] también conocido como [REDACTED] ordenando que por conducto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de dicha Secretaría, se notificara tal determinación al Gobierno de Polonia, ----

14.- El once de agosto de dos mil ocho, el C. [REDACTED] salió en libertad del Centro de Readaptación Social Varonil de San José el Alto Querétaro. -----

M

M



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

15.- El diecinueve de octubre de dos mil nueve, la Directora de Análisis Jurídico Internacional, y el Subdirector de Consultas, ambos de la Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, emitieron constancia de archivo definitivo dentro del expediente P/POL/0001/01/07, en la que se determinó concluir el procedimiento administrativo de extradición, archivar dicho expediente como total y definitivamente concluido, y enviarlo al archivo de concentración. -----

16.- Mediante escrito presentado ante la Procuraduría General de la República, el catorce de marzo de dos mil dieciséis, el C. [REDACTED] promovió demanda de reclamación patrimonial del Estado. -----

Marco de análisis y resolutorio: -----

En este apartado, se resolverá si existe actividad administrativa irregular del Estado, para ello, se tomarán como base los argumentos que emitieron las partes, así como las pruebas aportadas por las mismas. -----

En ese tenor, el reclamante en su escrito de reclamación, arguye que: -----

- No existió ni existe alguna causa penal en su contra, ni en alguno de los juzgados de México, ni de Alemania o de cualquier otro país. -----
- Desde el mes de agosto de 2008, al entrar y salir del país, se ve molestado por medio de actos de detención arbitraria por las autoridades



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

migratorias y policiales quienes pretextando la existencia de una "alerta roja", proceden a detenerlo, revisarlo, e inspeccionarlo. - - - - -

- En toda la extradición y desde la detención, no se le respetaron sus derechos de asistencia consular. - - - - -
- Que las autoridades que intervinieron en los actos dentro del trámite de extradición le han ocasionado daños y perjuicios económicos, refiriendo como dichos actos, entre otros, la falta de entrega de las cuentas de banco, la falta de pago de interés moratorio causado por la retención indebida del dinero de esas cuentas; la pérdida de un inmueble. - - - - -

Aunado a lo anterior, el reclamante en su escrito de desahogo de prevención de veintiséis de abril de dos mil dieciséis, adujo que la actividad administrativa irregular por parte de la Procuraduría General de la República, es la siguiente:-

- Orden de detención con fines de extradición.
- Ejecución de dicha orden.
- Orden de cancelación de sus cuentas bancarias.
- Ejecución de dicha orden.
- Aprisionamiento desde el mes de marzo de 2007, hasta el mes de agosto de 2008.
- Difusión de los actos narrados en los medios de comunicación nacional.

Respecto de las pruebas del reclamante [REDACTED]

cabe señalar que no le fue admitida prueba alguna de su parte, en virtud que las mismas no las ofreció en el momento procesal oportuno, además que las

M

h

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

que ofreció con posterioridad con el carácter de supervenientes, no le fueron admitidas, por no reunir los requisitos para tener la calidad de supervenientes, según consta en autos. - - - - -

Por su parte, la Dirección General de Procedimientos Internacionales de la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, al rendir su informe refirió esencialmente, lo siguiente:

- Que efectivamente el reclamante fue detenido el primero de marzo de dos mil siete, pero su detención no constituyó el delito de privación ilegal de la libertad, ni mucho menos fue detenido sin orden de aprehensión.
- Que la detención de manera precautoria a que fue sujeto el reclamante se encontró sujeta a un trámite de extradición internacional, cuyo procedimiento está contenido en una Ley Federal. - - - - -
- Que el reclamante fue detenido en razón de una solicitud de detención provisional con fines de extradición internacional realizada por el Gobierno Polaco. - - - - -
- Que el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Querétaro, fue quien libró la orden de detención con fines de extradición internacional con fundamento en los artículos 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, 17, 18, 22 y 24, de la Ley de Extradición Internacional. - - - - -

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

- Que el procedimiento de extradición internacional en contra del reclamante fue seguido en todo momento conforme a la Ley; de tal manera que el reclamante tuvo la oportunidad de recurrir el acuerdo que emitió la Secretaría de Relaciones Exteriores y respecto del cual le fue otorgado la protección de la Justicia Federal, por lo que la cancillería mexicana negó la extradición y ordenó la libertad del reclamante. - - - - -
- Que la intervención de la Procuraduría General de la República no fue de carácter oficioso, sino que derivó de un requerimiento que hizo un Estado extranjero vía Diplomática, como está establecido en la Ley de Extradición Internacional. - - - - -
- Que en ningún momento se solicitó el aseguramiento de las cuentas bancarias por parte de dicha autoridad. - - - - -
- Que la actuación de la Procuraduría General de la República, a través de la entonces Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica, se realizó conforme a derecho, atendiendo en todo momento, las disposiciones constitucionales y lo dispuesto por la Ley de Extradición Internacional y no de manera oficiosa o tendenciosa, como lo señala el reclamante. - - - - -

Ahora bien, dicha autoridad, ofreció como pruebas de su parte, las siguientes:

- a) DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el oficio ASJ-38431, de 8 de enero de dos mil siete, suscrito por la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Asistencia Jurídica de la Secretaría de



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO FEDERAL
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DEL PODER JUDICIAL

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

Relaciones Exteriores acompañando a la misma, LA SOLICITUD DE DETENCIÓN PROVISIONAL CON FINES DE EXTRADICIÓN INTERNACIONAL DEL CIUDADANO [REDACTED] (a)

[REDACTED] presentada por el Gobierno de la República de Polonia para ser procesado ante Fiscalía Regional de Cracovia Sródmiesscie, Polonia, dentro del procedimiento VDs 75/05/s, por dos delitos de fraude, previsto en el artículo 286, párrafo primero, en relación con el 294 párrafo primero y 12, todos del Código Penal de Polonia. Dicho oficio fue dirigido al Director General de Extradiciones y Asistencia Jurídica de la Procuraduría General de la República. - - - - -

b) DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el oficio SJAI/152/2007, de fecha veintitrés de febrero de dos mil siete, a través del cual, el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, presentó la solicitud de detención provisional con fines de extradición internacional, ante la oficialía de partes común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, que por razón de turno, le tocó conocer al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Querétaro. - - - - -

c) DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la orden de detención provisional con fines de extradición internacional, de veintisiete de febrero de dos mil siete, en contra de [REDACTED] suscrita por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Querétaro, dentro del procedimiento administrativo de extradición 001/2007-I. - - - -

d) DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el oficio ASJ-13494, de veinticinco de abril de dos mil siete, suscrito por la Dirección General de



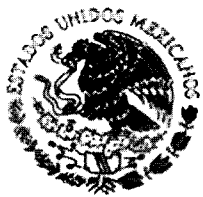
PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que contiene LA PETICIÓN FORMAL DE EXTRADICIÓN DE [REDACTED] [REDACTED] presentada por el Gobierno de la República de Polonia en nota diplomática número 11-45-07, de veintitrés de abril de dos mil siete, suscrita por el C. [REDACTED] Embajador de esa misión diplomática. Dicho oficio fue dirigido al Director General de Extradiciones y Asistencia Jurídica de la Procuraduría General de la República.-----

- e) DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el oficio SJAI/353/2007, de veintisiete de abril de dos mil siete, a través del cual, el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, presentó la petición formal de extradición internacional del C. [REDACTED] ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Querétaro. -----
- f) DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la constancia de celebración de la audiencia relativa a los artículos 24 y 25 de la Ley de Extradición Internacional, de fecha veintisiete de abril de dos mil siete, emitida dentro del procedimiento administrativo de extradición 001/2007-I. -----
- g) DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la opinión jurídica de veintinueve de junio de dos mil siete, emitida por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Querétaro, dentro del procedimiento administrativo de extradición 001/2007-I, en la que consideró procedente la extradición internacional de [REDACTED] al Gobierno Requirente. -----





PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

- h) DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el acuerdo de treinta y uno de junio de dos mil siete, dictado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, y por la cual se concedió al Gobierno de Polonia, la extradición de [REDACTED] para ser procesado por el delito de fraude. - - - -
- i) DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el acuerdo de ocho de agosto de dos mil ocho, emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, en cumplimiento de la ejecutoria dictada dentro del juicio de amparo 1036/2007 y su acumulado 1073/2007, tramitado ante el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Querétaro, en el que se dejó sin efectos el acuerdo de treinta y uno de junio de dos mil siete y se negó la extradición de [REDACTED] ordenando su inmediata libertad. - - - - -
- j) DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la constancia de archivo definitivo de diecinueve de octubre de dos mil nueve. - - - - -

Por su parte, el Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República en el Estado de Querétaro, argumentó en su informe substancialmente, lo siguiente: - - - - -

- Que el actuar de los servidores públicos Federales, adscritos en la época de los hechos a esa Delegación Estatal, fue apegado a la Ley y ajustado a los estándares que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Extradición Internacional, Código Federal de Procedimientos Penales y a la normatividad interna de la Procuraduría General de la República, como se constata en las actuaciones de [REDACTED]



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

expediente 01/2007-I, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el
Estado de Querétaro- - - - -

- Que al momento de realizar la detención se respetaron los derechos y garantías del reclamante que le otorga el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los preceptos 5, 17, 18, 22 y 24, de la Ley de Extradición Internacional, sin que exista prueba en contrario de una violación a los mismos por parte del personal de la Agencia Federal de Investigación o incluso de las autoridades del Poder Judicial de la Federación. - - - - -
- Que la privación de la libertad del reclamante no puede ser equiparada de modo alguno a una acción ilegal, ya que la misma obedeció al cumplimiento de una medida precautoria permitida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su numeral 119 y en el artículo 18 de la Ley de Extradición Internacional. - - - - -
- Que no existe medio de convicción que permita conocer que el Estado ejercitó acción con la finalidad de congelar las cuentas bancarias del reclamante. - - - - -

Ofreciendo como pruebas de su parte, un legajo de copias certificadas que contiene las constancias siguientes: - - - - -

- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el oficio SJAI/152/2007, de fecha veintitrés de febrero de dos mil siete, a través del cual, el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, presentó la



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

solicitud de detención provisional con fines de extradición internacional, ante la oficialía de partes común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, que por razón de turno, le tocó conocer al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Querétaro. - - - - -

- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la orden de detención provisional con fines de extradición internacional, de veintisiete de febrero de dos mil siete, en contra de [REDACTED] suscrita por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Querétaro, dentro del procedimiento administrativo de extradición 001/2007-I. - - - -

- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el oficio de cumplimiento de orden de detención provisional con fines de extradición, número AFI/QRO/1272/2007, de primero de marzo de dos mil siete, así como certificado médico de integridad física e identidad del reclamante. - - - -

- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el Acuerdo de primero de marzo de dos mil siete, dictado dentro del procedimiento administrativo de extradición 001/2007-I, en el cual, se tiene por cumplida la orden de detención provisional con fines de extradición internacional de [REDACTED]

- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la constancia de celebración de la audiencia relativa a los artículos 24 y 25 de la Ley de Extradición Internacional, de fecha veintisiete de abril de dos mil siete, emitida dentro del procedimiento administrativo de extradición 001/2007-I.

[Firma]

[Firma]





PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el oficio SJAI/353/2007, de veintisiete de abril de dos mil siete, a través del cual, el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, presentó la petición formal de extradición internacional del C [REDACTED] ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Querétaro.
- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la opinión jurídica de veintinueve de junio de dos mil siete, emitida por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Querétaro, dentro del expediente 001/2007-I, en la que consideró procedente la extradición internacional de [REDACTED] al Gobierno Requirente. -----
- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el acuerdo de treinta y uno de junio de dos mil siete, dictado por la Secretaria de Relaciones Exteriores, y por la cual se concedió al Gobierno de Polonia, la extradición de [REDACTED] para ser procesado por el delito de fraude. ----
- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el acuerdo de trece de agosto de dos mil ocho, emitido por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Querétaro, dentro del expediente 001/2007-I. -----
- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la razón actuarial de veintiséis de agosto de dos mil ocho, emitida por el Actuario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Querétaro, dentro del expediente 001/2007-I.



11

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el acuerdo de diez de octubre de dos mil ocho, emitido por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Querétaro, dentro del expediente 001/2007-I. - - - - -

Ahora bien, de todo lo anterior, esta autoridad substanciadora considera que el hecho de que la Procuraduría General de la República, a través de sus autoridades haya participado en el procedimiento administrativo de extradición incoado en contra del C. [REDACTED] no implica la existencia de una actividad administrativa irregular por parte del Estado. - - - - -

Ello es así, pues los artículos 119¹³, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 17 y 21,¹⁴ y demás aplicables de la Ley de Extradición Internacional, prevén la participación de la Procuraduría General de la República, en este tipo de procedimientos administrativos de extradición. - - - - -

En efecto, el artículo 119, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere entre otras cuestiones, que las extradiciones a requerimiento

¹³ ARTÍCULO 119.- Cada Estado y el Distrito Federal están obligados a entregar sin demora a los indicados, procesados o sentenciados, así como a practicar el aseguramiento y entrega de objetos, instrumentos o productos del delito, atendiendo a la autoridad de cualquier otra entidad federativa que los requiera. Estas diligencias se practicarán, con intervención de las respectivas procuradurías generales de justicia, en los términos de los convenios de colaboración que, al efecto, celebren las entidades federativas. Para los mismos fines, los Estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios de colaboración con el Gobierno Federal, quien actuará a través de la Procuraduría General de la República.

Las extradiciones a requerimiento de Estado extranjero serán tramitadas por el Ejecutivo Federal, con la intervención de la autoridad judicial en los términos de esta Constitución, los Tratados Internacionales que al respecto se suscriban y las leyes reglamentarias. En esos casos, el auto del juez que mande cumplir la requisitoria será bastante para motivar la detención hasta por sesenta días naturales.

¹⁴ ARTÍCULO 17.- Cuando un Estado manifieste la intención de presentar petición formal para la extradición de una determinada persona, y solicite la adopción de medidas precautorias respecto de ella, éstas podrán ser acordadas siempre que la petición del Estado solicitante contenga la expresión del delito por el cual se solicitará la extradición y la manifestación de existir en contra del reclamado una orden de aprehensión emanada de autoridad competente.

Si la Secretaría de Relaciones Exteriores estimare que hay fundamento para ello, transmitirá la petición al Procurador General de la República, quien de inmediato promoverá ante el Juez de Distrito que corresponda, que dicte las medidas apropiadas, las cuales podrán consistir, a petición del Procurador General de la República, en arraigo o las que procedan de acuerdo con los tratados o las leyes de la materia.

ARTÍCULO 21.- Resuelta la admisión de la petición la Secretaría de Relaciones Exteriores enviará la requisitoria al Procurador General de la República acompañando el expediente, a fin de que promueva ante el Juez de Distrito competente, que dicte auto mandándola cumplir y ordenando la detención del reclamado, así como, en su caso, el secuestro de papeles, dinero u otros objetos que se hallen en su poder, relacionados con el delito imputado o que puedan ser elementos de prueba, cuando así lo hubiere pedido el Estado solicitante.



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

de Estado extranjero serán tramitadas por el Ejecutivo Federal, con la intervención de la autoridad judicial. -----

Asimismo, determina que el auto del juez que mande cumplir la requisitoria será bastante para motivar la detención hasta por sesenta días naturales. -----

Por su parte, el artículo 17, de la Ley de Extradición Internacional, entre otras cuestiones señala que cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores, manifieste la intención de solicitar petición formal de extradición, y estime necesario solicitar medidas precautorias respecto de una determinada persona, transmitirá la petición al Procurador General de la República, quien de inmediato promoverá ante el Juez de Distrito que corresponda, dicha petición.

Asimismo, el artículo 21 de la Ley de Extradición, señala que una vez que la Secretaría de Relaciones Exteriores, resuelva sobre la petición formal de extradición, renviará la requisitoria al Procurador General de la República, a fin de que promueva ante el Juez de Distrito competente la petición formal de extradición internacional. -----

A mayor abundamiento el artículo 4 fracción III del Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República,¹⁵ establece que dentro de las facultades que tiene el Ministerio Público de la Federación, una de ellas es la de intervenir en la extradición, entrega o traslado de indiciados, procesados o sentenciados, en los términos de las disposiciones aplicables así como en el cumplimiento de los tratados internacionales en que los Estados Unidos Mexicanos sea parte.-

¹⁵ Artículo 4.- Corresponde al Ministerio Público de la Federación:

III. Intervenir en la extradición, entrega o traslado de indiciados, procesados o sentenciados, en los términos de las disposiciones aplicables, así como en el cumplimiento de los tratados internacionales en que los Estados Unidos Mexicanos sea parte;



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

Por otro lado, el artículo 52 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República¹⁶, en su fracción primera dispone que dentro de las facultades que tiene el Director General de Procedimientos Internacionales de la Procuraduría General de la República, una de ellas, es la de intervenir en los casos de extradición internacional conforme con lo dispuesto por el artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales en la materia de los que México sea parte, la Ley de Extradición Internacional, la Ley Orgánica y demás disposiciones aplicables. -----

Bajo esa premisa, al existir disposiciones legales sobre la intervención de la Procuraduría General de la República, en los procedimientos administrativos de extradición, pone en evidencia que las autoridades de esta Institución, solo actuaron en apego y ejercicio de sus funciones como autoridades vinculadas, y en atención al marco legal que regula los procedimientos, sin incurrir en arbitrariedad, ni en exceso de sus facultades legales, y que ello hubiese sido motivo de una actividad administrativa irregular, aunado a que todos y cada uno de las actuaciones que realizaron las autoridades, siempre estuvieron fundadas y motivadas. -----

Es importante dejar en claro que la Secretaría de Relaciones Exteriores, es la única autoridad facultada para admitir una petición formal de extradición, y en consecuencia de ello, tanto la Procuraduría General de la República, como el Juez de Distrito que conozca del procedimiento deben dar curso a este en los

¹⁶ Artículo 52. Al frente de la Dirección General de Procedimientos Internacionales habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes
I. Intervenir en los casos de extradición internacional, conforme con lo dispuesto por el artículo 119 de la Constitución, los tratados internacionales en la materia de los que México sea parte, la Ley de Extradición Internacional, la Ley Orgánica y demás disposiciones aplicables; ...



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

términos respectivos que lo ordena el respectivo tratado internacional o en su caso la Ley de Extradición Internacional. - - - - -

Es así, que la actuación de la Procuraduría General de la República, a través de la entonces Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica, se realizó atendiendo en todo momento, las disposiciones constitucionales y lo dispuesto por la Ley de Extradición Internacional y no de manera oficiosa o tendenciosa, como lo señala el reclamante. - - - - -

A mayor abundamiento, el hecho de que el hoy reclamante haya obtenido su libertad no implica que el Agente del Ministerio Público de la Federación haya llevado a cabo una actividad administrativa irregular, lo que en ningún momento conlleva a que en el momento en que se determine revocar la determinación de una u otra autoridad, ya sea administrativa o judicial, implique que por este simple hecho sea constitutivo de responsabilidad patrimonial del Estado. - - - - -

Si bien es cierto el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Vigésimo Segundo Circuito, dentro del Amparo en Revisión 67/2008, resolvió dejar sin efectos la resolución mediante la cual se autorizó la extradición del C. [REDACTED]

[REDACTED] se ordenó ponerlo en libertad, también resulta cierto que dicha concesión se otorgó básicamente porque el Gobierno de Polonia no cumplió con diversos requisitos establecidos por la legislación aplicable, sin que dicha omisión sea atribuible a esta Institución. - - - - -

Además, en ningún momento el legislador al momento de crear la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, previó que los actos de la autoridad que se determinen nulos o se revoquen, por autoridad competente para ello,

M



ORGANIZACIÓN GENERAL
DE LA
FEDERACIÓN

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

traigan aparejado un actuar irregular de la autoridad que conlleve una indemnización por este rubro.-----

Sirven de sustento a lo anterior, por analogía las tesis cuyos rubros, son **RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LA NULIDAD DEL ACTO IMPUGNADO DECRETADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO IMPLICA, NECESARIAMENTE, UNA ACTIVIDAD IRREGULAR DEL ENTE ESTATAL¹⁷** y **ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA IRREGULAR DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. NO LA CONSTITUYE EL HECHO DE QUE EL ÓRGANO JUDICIAL EMITA UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA EN LA CAUSA PENAL.¹⁸**-----

De igual forma, sería jurídicamente ilógico el hecho de que cualquier determinación que revoque o modifique una resolución administrativa o judicial, implique por sí misma una indemnización por el rubro de Responsabilidad Patrimonial del Estado, ya que esta afirmación volvería imposible la actividad pública de administración de la justicia.-----



17 La Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado es reglamentaria del párrafo segundo del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado. En esa lógica, el hecho de que en el juicio contencioso administrativo se declare la nulidad del acto impugnado no implica, necesariamente, que se tenga por acreditada "la actividad irregular" del ente estatal, en virtud de que la ley citada prevé las cargas probatorias y principios que deben observarse para ese efecto, siendo un requisito ineludible acreditar la relación causal entre la acción u omisión imputada al ente estatal y el daño causado, y que a su vez, se puedan hacer valer las excepciones señaladas en la ley; máxime que el artículo 20 del referido ordenamiento legal establece que la nulidad del acto administrativo "no presupone por sí misma derecho a la indemnización", pues para ello debe sustanciarse el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, conforme a las reglas de la ley reglamentaria mencionada.

18 La función "regular" del Ministerio Público de la Federación durante la averiguación previa consiste en realizar "las diligencias necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado" a efecto de estar en aptitud de ejercer la acción penal; en esa tesitura, la realización de esas diligencias, debe considerarse dentro de las facultades constitucionales y legales que norman su actuar por lo que, con independencia de las determinaciones que lleguen a emitir los Jueces Federales respecto de la inocencia o culpabilidad de los procesados, no podría atribuirsele el carácter de actividad administrativa "irregular" o "anormal", pues basta con que haya cumplido con la carga investigatoria necesaria para considerar satisfecha la existencia del cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal. En efecto, con independencia de que en la sentencia definitiva se declare la inocencia de los indiciados, ello no conlleva, en sí y por sí mismo, la demostración jurídica de que las actuaciones realizadas durante la averiguación previa resultan irregulares, pues en esa etapa pre-procesal, basta con que los indicios sean suficientes para sustentar el estándar de "probable" responsabilidad en la comisión de los hechos delictivos y del cuerpo del delito. Estimar lo contrario implicaría que el solo hecho de que los Jueces emitan una sentencia absolutoria, obligaría a que en el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado siempre deba otorgarse una indemnización por la actividad administrativa irregular, a pesar de que el Ministerio Público de la Federación hubiese cumplido con sus funciones constitucionales y legales de argumentar sólidamente -con base en los indicios recabados y las diligencias investigatorias realizadas- las razones por las que en la causa en cuestión se advirtió la existencia del conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho delictivo y la probable responsabilidad en su comisión.



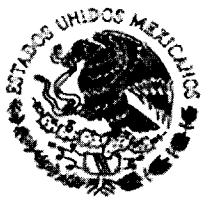
PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

Además, de que la privación de la libertad no es un acto atribuible a la Procuraduría General de la República, en virtud que no es un acto que compete a la autoridad administrativa, sino jurisdiccional quien es el único que cuenta con las facultades de emitir precisamente las resoluciones que incidan en la libertad de los indiciados, ya sea mediante medidas precautorias, arraigo o las que precedan con los tratados internacionales o las leyes de la materia, en otras palabras, en el presente asunto, el Juez de Distrito fue quien mediante resolución de fecha veintisiete de febrero de dos mil siete ordenó la detención provisional con fines de extradición internacional del reclamante. - - - - -

Ahora bien, por lo que respecta a **la orden de detención con fines de extradición**, que el reclamante refiere como actividad administrativa irregular por parte de esta Institución, debe precisarse que no es un acto que se pueda imputar a la Procuraduría General de la República, ya que dicho ente a través de sus unidades no fue quien emitió dicha orden, sino que está fue librada por Juez Segundo de Distrito en el Estado de Querétaro, como consta en el material probatorio ofrecido por las autoridades, aunado a que independientemente de ello dicha determinación no es objeto de reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado, resultando aplicable la tesis VI-TASR-VI-1, publicada en la Revista que emite el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sexta Época. Año I. 4. Abril 2008. P. 270, que lleva como rubro "**ACTIVIDAD JURISDICCIONAL. NO ES OBJETO DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO**"¹⁹ - - - - -

¹⁹ ACTIVIDAD JURISDICCIONAL. NO ES OBJETO DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO".- Resulta improcedente la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se trata de actos jurisdiccionales, pues si bien la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado fija las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes sin obligación jurídica de soportarlo sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado, lo cierto es que no contempla la responsabilidad patrimonial de éste por daños derivados de actuaciones jurisdiccionales, puesto que al referirse a "actividad administrativa", distingue en sentido material a la misma de las funciones judicial y legislativa, toda vez que de la exposición de motivos de la ley se desprende que el legislador consideró que en caso de incluir los actos judiciales, existía el riesgo de estar creando una instancia más de revisión.



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

En relación con la ejecución de la orden de detención con fines de extradición, tal y como se acredita con la resolución del procedimiento especial 01/2007-I, de fecha veintisiete de febrero de dos mil siete, emitida por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Querétaro y con el oficio número AFI/QRO/1272/2007, de fecha primero de marzo de dos mil siete, signado por los agentes de la Policía Federal Investigadora adscritos a la Jefatura Regional del Estado de Querétaro de la Procuraduría General de la República, la misma se realizó en debido cumplimiento a lo ordenado por la autoridad jurisdiccional, por lo que una vez que se buscó, y localizó al C. [REDACTED]

[REDACTED] se le detuvo y fue puesto a disposición del Juez, en el Centro de Readaptación Varonil de San José el Alto en el Estado de Querétaro; al C.

[REDACTED] participando como autoridad vinculada en el procedimiento de extradición en términos de la legislación aplicable a la materia, sustentado lo referido, la tesis cuyo rubro es, **EXTRADICIÓN. LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES ES LA AUTORIDAD FACULTADA PARA ADMITIR UNA PETICIÓN FORMAL DE ESA NATURALEZA, FORMULADA CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5o., INCISO B), DE LA CONVENCION RELATIVA FIRMADA EN MONTEVIDEO EL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES²⁰.**-----

²⁰ Conforme a lo establecido en el artículo 1o. de la Ley de Extradición Internacional, cuando no exista tratado internacional aplicable, las disposiciones de este ordenamiento serán las que determinen los casos y las condiciones para entregar a los Estados que lo soliciten, a los acusados ante sus tribunales o a los condenados por éstos por delitos del orden común; en tal virtud, si en el referido instrumento internacional no se prevé cuál es la autoridad nacional competente para resolver sobre la admisión de la petición formal de extradición y valorar los requisitos contenidos en el artículo 5o. de la Convención sobre Extradición firmada en Montevideo el veintiséis de diciembre de mil novecientos treinta y tres, resulta necesario acudir a lo señalado en la citada ley, en cuyos artículos 18 a 21 prevé que recibida aquella petición, la Secretaría de Relaciones Exteriores la examinará y si la encontrare improcedente no la admitirá, lo que deberá comunicar al Estado solicitante; en el supuesto de que no se hubieran reunido los requisitos establecidos en el tratado o en el artículo 16 de la propia ley, la citada secretaría lo hará del conocimiento del promovente para que subsane las omisiones o defectos; y, en caso de admitirse la petición, la referida dependencia enviará la requisitoria al procurador general de la República, acompañando el expediente, a fin de que promueva ante el Juez de Distrito competente el dictado del auto que la cumpla y ordene la detención del reclamado. En ese tenor, debe estimarse que a la mencionada secretaría le corresponde, necesariamente, admitir o negar la petición formal de extradición y, además,

M



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

Por lo que se concluye, que dicha actuación se realizó en estricto cumplimiento a la petición realizada por el Juez Segundo de Distrito, como bien lo refiere el Delegado Estatal de Querétaro en el informe correspondiente, por lo que no se puede equiparar a una actividad administrativa irregular, dado que el actuar de los agentes derivó de un mandamiento judicial expedido por una autoridad judicial competente para ello. -----

Ahora bien, respecto de **los actos de orden y ejecución de cancelación de las cuentas bancarias a nombre del reclamante con la institución Bancaria BANCOMER S.A. DE C.V.;** y que refiere el C. [REDACTED]

Lehmann, como actividades administrativas irregulares debe señalarse, que no existe en autos evidencia alguna de actividad administrativa irregular, relacionada con las imputaciones que se hacen a las unidades administrativas de la Procuraduría General de la República. De una primera parte, no se cuenta con elemento de convicción alguna para tener por acreditada la existencia de una orden de cancelación de las cuentas bancarias del reclamante, en virtud que el procedimiento de extradición no generó ninguna intervención en sus cuentas bancarias; aunado a que el reclamante no acreditó con ningún elemento fehaciente tal circunstancia. Sin perjuicio de lo cual debe advertirse que de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Extradición Internacional,²¹ es el Juez de Distrito competente, que dicte la orden de la detención del

su admisión vincula a los restantes órganos del Estado que participan en el procedimiento de extradición, pues como consecuencia de ello, tanto la Procuraduría General de la República como el Juez de Distrito que conozca del procedimiento deben dar curso a éste en los términos que lo ordena el respectivo tratado internacional o, en su caso, la indicada Ley de Extradición Internacional.

²¹Resuelta la admisión de la petición la Secretaría de Relaciones Exteriores enviará la requisitoria al Procurador General de la República acompañando el expediente, a fin de que promueva ante el Juez de Distrito competente, que dicte auto mandándola cumplir y ordenando la detención del reclamado, así como, en su caso, el secuestro de papeles, dinero u otros objetos que se hallen en su poder, relacionados con el delito imputado o que puedan ser elementos de prueba, cuando así lo hubiere pedido el Estado solicitante.



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

reclamado, quien también está facultado para ordenar, en su caso, el secuestro de papeles, dinero u otros objetos que se hallen en su poder, relacionados con el delito imputado o que puedan ser elementos de prueba, cuando así lo hubiere pedido el Estado solicitante. No obstante, tampoco existe medio de convicción alguno en las actuaciones que la autoridad judicial haya dictado orden en ese sentido, que hubiese sido ejecutada por la Procuraduría General de la República -----

Por lo que refiere el reclamante en relación **con los actos de aprisionamiento desde el mes de marzo de 2007 hasta el mes de agosto de 2008**, mismos que refiere como actividad administrativa irregular, debe señalarse que tampoco se le puede dar el carácter de actividad administrativa irregular del Estado, toda vez que a través de la Nota Diplomática 11-175-06, de diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, el embajador de Polonia en México, solicitó la detención provisional con fines de extradición del C [REDACTED] LEHMANN. -----

Asimismo mediante el oficio ASJ-38431, de fecha ocho de enero de dos mil siete, signado por la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, transmitió la petición de detención provisional con fines de extradición del hoy reclamante, por lo cual con fundamento en el artículo 21²² de la Ley de Extradición Internacional, mediante oficio número SJA/157/2007, el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, solicitó la detención provisional con

²² ARTICULO 21.- Resuelta la admisión de la petición la Secretaría de Relaciones Exteriores enviará la requisitoria al Procurador General de la República acompañando el expediente, a fin de que promueva ante el Juez de Distrito competente, que dicte auto mandándola cumplir y ordenando la detención del reclamado, así como, en su caso, el secuestro de papeles, dinero u otros objetos que se hallen en su poder, relacionados con el delito imputado o que puedan ser elementos de prueba, cuando así lo hubiere pedido el Estado solicitante.

24



DIRECCIÓN GENERAL
DE LA
REPUBLICA

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

finés de extradición, cumpliendo con los requisitos formales y legales establecidos en los ordenamientos legales aplicables; siendo el Juez Segundo de Distrito quien libró la orden de detención provisional. - - - - -

En segundo término, ha quedado debidamente probado que una vez que el Juzgado de conocimiento emitió su opinión jurídica a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en términos de lo dispuesto por el artículo 29²³ de la Ley de Extradición Internacional, el C. [REDACTED]

quedó a disposición de dicha Secretaría; por lo que no puede de modo alguno considerarse como actividad irregular del estado imputable a esta Procuraduría, ya que los días que se encontró recluido el reclamante corresponden al tiempo que duró el procedimiento; es decir, desde el **primero de marzo de dos mil siete**, momento en el que se cumplimentó el mandato judicial dictado en el procedimiento especial 01/2007-I; hasta el **ocho de agosto de dos mil ocho**; fecha en la que la Secretaría de Relaciones Exteriores, ordenó levantar las medidas restrictivas de libertad decretadas al reclamante; momentos que no son atribuibles a esta Institución. - - - - -

Aunado a que, el hecho de que el hoy reclamante estuvo privado de su libertad durante el periodo mencionado, fue porque una vez obtenida la detención formal su situación jurídica cambio, esto es, dejó de ser detención provisional, la privación de la libertad ya no deriva de la medida precautoria, si no que encuentra su fundamento en los fines esenciales de la extradición, pues de lo contrario no podría cumplirse el compromiso internacional de entregar al Estado requirente a la persona reclamada, sirviendo de apoyo a lo anterior, la

²³ ARTÍCULO 29.- El Juez remitirá, con el expediente, su opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que el Titular de la misma dicte la resolución a que se refiere el artículo siguiente. El detenido entre tanto, permanecerá en el lugar donde se encuentra a disposición de esa Dependencia.

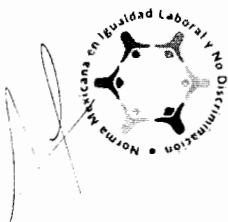


PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

jurisprudencia cuyo rubro es, **EXTRADICIÓN INTERNACIONAL. EL HECHO DE QUE EL SUJETO RECLAMADO CONTINÚE PRIVADO DE SU LIBERTAD DESPUÉS DE QUE EL ESTADO REQUIRENTE PRESENTA EN TIEMPO LA SOLICITUD FORMAL RELATIVA, NO IMPLICA PROLONGACIÓN DE LA DETENCIÓN NI VIOLACIÓN DIRECTA AL ARTÍCULO 119, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.**²⁴ -----

Por último, en cuanto a la **difusión de los actos anteriores en los medios de comunicación nacional**; la parte reclamante, no aportó elemento probatorio que lo acredite; y de conformidad con el artículo 22 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado²⁵, el reclamante que considere lesionado su patrimonio, a causa de la responsabilidad del Estado por no tener la obligación jurídica de soportarlo, está obligado a probarlo, lo cual en la especie no aconteció, por lo que tampoco se considera como actividad irregular por parte de esta Institución; y de ser el caso, debe advertirse que las supuestas publicaciones hechas en contra del reclamante son producto de los medios de comunicación, es decir, de actividades de terceros ajenos a la Procuraduría General de la República. -----



²⁴ Conforme al citado precepto constitucional, el plazo de detención de 60 días naturales para efectos de extradición se refiere exclusivamente a la detención provisional que como medida precautoria regulan los artículos 17 y 18 de la Ley de Extradición Internacional, dado que esta interpretación es la que hace posible la extradición, como institución de derecho internacional basada en el principio de reciprocidad, por virtud del cual se busca la colaboración en la entrega de un indiciado, procesado, acusado o sentenciado por parte del Estado requiriente, a efecto de que el Estado requirente tenga garantizada la efectiva procuración y administración de justicia en el territorio donde ejerce soberanía. Una interpretación contraria, en el sentido de que el mencionado plazo constitucional se refiere al periodo máximo de detención durante todo el procedimiento administrativo de extradición, haría imposible lograr la intención del Constituyente respecto del cumplimiento de los pactos internacionales de cooperación, tendientes a evitar la impunidad de los delitos, en tanto sería insuficiente para desahogar la solicitud de detención provisional y, una vez tramitada la petición formal de extradición, decidir lo conducente y, en su caso, acordar la entrega del reclamado al Estado requirente. Por tanto, la circunstancia de que el sujeto reclamado continúe privado de su libertad después de que se presente en tiempo la solicitud formal de extradición con los requisitos correspondientes no implica prolongación de su detención ni violación directa al artículo 119, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el plazo constitucional de 60 días naturales se refiere exclusivamente a su detención provisional y al decretarse su detención formal en el procedimiento especial de extradición, su situación jurídica cambia porque la privación de la libertad ya no deriva de la medida precautoria, sino que encuentra su fundamento en los mismos fines esenciales de ese procedimiento, pues de lo contrario no podría cumplirse el compromiso internacional de entregar al Estado requirente a la persona reclamada.

²⁵ ARTÍCULO 22.- La responsabilidad del Estado deberá probarla el reclamante que considere lesionado su patrimonio, por no tener la obligación jurídica de soportarlo. Por su parte, al Estado corresponderá probar, en su caso, la participación de terceros o del propio reclamante en la producción de los daños y perjuicios irrogados al mismo; que los daños no son consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado; que los daños derivan de hechos o circunstancias imprevisibles o inevitables según los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de su acaecimiento, o bien, la existencia de la fuerza mayor que lo exonera de responsabilidad patrimonial.



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

En razón de lo anterior, esta autoridad sustanciadora, se abstiene de analizar lo relativo a la reparación del daño, pues el reclamante no acreditó en el presente procedimiento la existencia de una actividad administrativa irregular desplegada por el Estado; a saber, de la Procuraduría General de la República, en su contra que le haya ocasionado un daño que no encontraba jurídicamente obligado a resentir por lo que, resulta improcedente cualquier condena por reparación del daño ya sea de carácter patrimonial, material, personal o moral en favor del C. [REDACTED] -----

Y, en la especie para que sea procedente la indemnización exigida el reclamante debió demostrar fehacientemente lo siguiente, a) la actividad administrativa irregular imputable al Estado; b) la existencia de los daños y perjuicios que constituyan la lesión patrimonial reclamada, y c) el nexo causal entre el daño y la acción administrativa irregular imputable al Estado. -----

Se sigue que, si la parte reclamante no acreditó durante el procedimiento la existencia de la actividad administrativa irregular de la Procuraduría General de la República, y por el contrario, las unidades administrativas de la Procuraduría General de la República a las que se imputó directamente la actividad administrativa irregular, si acreditaron que su actuación se ciñó al ejercicio de sus atribuciones y el cumplimiento de mandato de la autoridad judicial competente. En consecuencia resulta innecesario efectuar el análisis de la existencia del daño causado y del nexo causal entre este y la actividad administrativa que se aduce de irregular, ya que al no acreditar el primer elemento de procedencia, para justificar la indemnización reclamada es evidente que tampoco se comprobaría el nexo causal, esto es, a nada práctico llevaría su estudio y resultaría inconducente para resolver el presente asunto, *u*

M



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

sirven de apoyo a lo anterior, los precedentes emitidos por el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuyos rubros son, **"RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. RESTITUCIÓN DE UN DERECHO SUBJETIVO VIOLADO CUANDO SE CONDENA A LA AUTORIDAD, EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA PREVIAMENTE DEBE CONSTATAR QUE SE TIENE EL DERECHO QUE SE RECLAMA"** y **"RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. ES INNECESARIO EL ESTUDIO DE LA EXISTENCIA DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CONSTITUYEN LA LESIÓN PATRIMONIAL RECLAMADA, SI LA ACTORA NO ACREDITÓ DURANTE EL JUICIO LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA IRREGULAR IMPUTABLE AL ESTADO"**. --

Por lo antes expuesto, se considera que la acción de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, iniciada por el C. [REDACTED] resulta improcedente, toda vez que, como se analizó anteriormente, se carece de elementos objetivos con los que se pueda tener por acreditado que las actividades desplegadas por la Procuraduría General de la República hayan sido irregulares y que, además, con ellas se le haya producido algún daño o perjuicio, tal y como quedó asentado en términos de lo expuesto en la presente resolución. -----

Es por ello, que al no existir actividad irregular por parte de Procuraduría General de la República, a través de sus unidades administrativas, en el presente procedimiento, así como tampoco nexo causal entre el daño argumentado con el probable derecho a una indemnización, resultan infundados los argumentos hechos valer en la presente reclamación y por ende improcedente la reclamación de mérito. -----



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

CUARTO.- De la Prescripción. Ahora bien, independiente de lo anterior, en el presente asunto, de tanto del escrito de reclamación como de los medios de convicción que obran actuaciones, resulta evidente que en perjuicio del hoy reclamante, operó la figura de la prescripción que contempla el artículo 25 de la Ley de la Materia, en razón, que el C. [REDACTED] se encontraba facultado para reclamar indemnización en esta vía administrativa a partir del once de agosto de dos mil ocho. -----

En efecto, de las constancias del cuaderno de pruebas del Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Querétaro, específicamente, la razón levantada en los autos del expediente del procedimiento especial número 01/2007-I, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Querétaro, constancia que obra en copia certificada a foja 172, y a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y esta a su vez a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, **se advierte que el reclamante obtuvo su libertad el día once de agosto de dos mil ocho**, por lo que no obstante que se determinó que en el presente asunto no existió actividad administrativa irregular por parte de la Procuraduría General de la República, los actos reclamados a esta Institución, cesaron en sus efectos en la fecha referida, ya que es la fecha en que el reclamante fue puesto en libertad, por lo que es a partir de ese momento en que deben computarse los plazos de la prescripción. -----





PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
DEFENSA

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

En efecto, los plazos que refiere el artículo 25²⁶ de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, deben computarse, a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera producido la lesión patrimonial, o a partir del momento en que hubiesen cesado sus efectos lesivos, si fuesen de carácter continuo. -----

Ahora bien, el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, establece dos plazos de prescripción: -----

- 1) De un año cuando se trate de **daños patrimoniales**.
- 2) De dos años, cuando se trate de **daños de carácter físico o psíquico**.

Con base en lo anterior, y, tomando en cuenta que el cómputo de los plazos de prescripción del derecho del reclamante para requerir la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado debe realizarse a partir del **once de agosto de dos mil ocho**, es dable concluir que estos trascurrieron de la siguiente forma: -----

- a) De haber existido **daños patrimoniales** (plazo de un año), del **once de agosto de dos mil ocho, al once de agosto de dos mil nueve**.
- b) De haber existido **daños de carácter físico o psíquico**. (plazo de dos años), del **once de agosto de dos mil ocho, al once de agosto de dos mil diez**.

²⁶ ARTÍCULO 25.- El derecho a reclamar indemnización prescribe en un año, mismo que se computará a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera producido la lesión patrimonial, o a partir del momento en que hubiesen cesado sus efectos lesivos, si fuesen de carácter continuo. Cuando existan daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo de prescripción será de dos años."



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

Bajo ese orden de ideas, si el reclamante formuló su reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado, ante la Oficialía de Partes de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República hasta el día catorce de marzo de dos mil dieciséis, resulta evidente que dicha reclamación fue inoportuna, toda vez que a esa fecha el derecho del reclamante para ejercer la acción correspondiente había prescrito, al haber transcurrido en exceso el plazo durante el cual estuvo en posibilidad legal de ejercer tal derecho, atento a lo señalado en párrafos precedentes. - -

Por lo expuesto y fundado se -----

RESUELVE:

PRIMERO.- Atendiendo al contenido del considerando **TERCERO**, resultó **IMPROCEDENTE** la reclamación que en vía de responsabilidad patrimonial del Estado promovió el C. [REDACTED] en contra de la Procuraduría General de la República, en virtud que no se acreditó la existencia de actividad irregular del Estado y por tanto, el nexo causal entre ésta con un daño. -----

SEGUNDO.- Atendiendo al contenido del considerando **CUARTO** se declara que el derecho del C. [REDACTED] para reclamar de la Procuraduría General de la República, la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, se encuentra prescrito, de conformidad con el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. -----



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016

TERCERO.- NOTIFÍQUESE la presente resolución personalmente al C. [REDACTED] que en términos de lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, en relación con el artículo 39 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de aplicación supletoria, es recurrible mediante el recurso de revisión en vía administrativa, y que para interponerlo dispone de un término de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la presente resolución, conforme a lo previsto por el artículo 85 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ante esta Dirección dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, o bien directamente por la vía jurisdiccional ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa dentro del término de treinta días contados a partir de aquel en que surta efectos la notificación de la presente resolución, en términos de lo dispuesto por el artículo 13, fracción I inciso a) de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. -----

CUARTO.-NOTIFÍQUESE por oficio al **DIRECTOR GENERAL DE PROCEDIMIENTOS INTERNACIONALES DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES AGREGADURÍAS DE LA SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**, y al **DELEGADO ESTATAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO**.-----

[Firma]

M





CAPITAL GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EXPEDIENTE NÚMERO: DGAJ/PRPE/006/2016


Se autoriza a los CC. Leslie Jazmín Morales Flores, Patricia Karina Hernández Pérez, Luis Ángel Jauregui Cruz, María Fernanda del Valle Martínez y Adrián Bañuelos Sánchez, para que de manera indistinta lleven a cabo la notificación de la presente resolución. -----

Así lo resolvió y firma el licenciado Óscar Langlet González, Director General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República. -----

Ciudad de México, a dos de febrero de dos mil diecisiete.


DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
LICENCIADO OSCAR LANGLET GONZÁLEZ.
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.




Revisó y Autorizó: Lic. Jair Armas Lara.
Elaboró: Lic. Leslie Jazmín Morales Flores.

La Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 110 fracción I y 113, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, clasifica dentro de la presente resolución, como información confidencial:

- Nombre de la parte reclamante.
- Domicilio del reclamante.
- Nombre de los abogados del reclamante.